

En busca de la política: descontento, desgobiernos y democracia deficitaria*

In search of politics: discontent, misgovernment and deficit democracy

Luis Alfonso Herrera Robles**

SUMARIO

1. Introducción/ 2. Clase política, gobierno de la ciudad y decrepitud/ 3. Desgobierno, descontento y déficit ciudadano/ 4. Los jóvenes y los (in)migrantes frente a la ciudadanía/ 5. A modo de reflexión final: la democracia perfectible, rumores ciudadanos

RESUMEN

En este artículo se hace una reflexión crítica sobre las formas en que las clases políticas y gobernantes están gestionando las ciudades. Se habla de los gobiernos y la decrepitud en la que han caído tanto los locales como los nacionales respecto a los asuntos públicos de la ciudad y la ciudadanía; se parte de la idea de que la

decrepitud es un rasgo característico de las actuales clases dirigentes, mismas que han abandonado su responsabilidad respecto a las agendas sociales y demandas ciudadanas.

PALABRAS CLAVE

Clase política, gobierno, ciudad, decrepitud y abandono

ABSTRACT

In this article, a critical reflection is made on the ways in which political and ruling classes are managing cities. There is talk of governments and the decrepitude in which both local and national ones have fallen in relation to the public affairs of the city and citizenship; it is based on the idea

that decrepitude is a characteristic feature of the current ruling classes, which have abandoned their responsibility for social agendas and citizen demands.

KEYWORDS

Political class, government, city, decrepitude and abandonment

Introducción

En este artículo se hace una reflexión crítica sobre las formas en que las clases políticas y gobernantes están gestionando las ciudades. Se habla de los gobiernos y la decrepitud en la que han caído tanto los locales como los nacionales respecto a los asuntos públicos de la ciudad y la ciudadanía; se parte de la idea de que la decrepitud es un rasgo característico de las actuales clases dirigentes, mismas que han abandonado su respon-

*Recibido el 7 de abril de 2017. Aceptado el 12 de junio de 2017.

**Doctor en Ciencias Políticas y de la Administración por la Universidad Autónoma de Barcelona. Maestro investigador de tiempo completo de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez. Correo electrónico: lherrera@uacj.mx y alfluish@gmail.com

sabilidad respecto a las agendas sociales y demandas ciudadanas. El clima de inseguridad, precarización, desintegración social, degradación urbana y otros malestares es, en parte, responsabilidad de quienes han estado al frente de las administraciones de los gobiernos locales y centrales, debido a la práctica sistemática de una política de abandono que ha desplazado de las agendas y políticas públicas de los gobiernos los asuntos prioritarios de la ciudad y la ciudadanía.

También, se desarrolla un apartado sobre las consecuencias de esta política de abandono que ejercen los gobiernos como parte de lo que deberían ser políticas públicas y de intervención social y comunitaria. Los resultados de las malas gestiones y la decrepitud en la que han caído muchas de las clases dirigentes en América Latina, son el descontento de la ciudadanía y un déficit ciudadano que inmediatamente crea un déficit democrático. Además de que encontramos en muchas ciudades de la región una serie de desgobiernos que son acompañados de violencia urbana y social, de inseguridad ciudadana, precarización, exclusión y marginación social y otras taras como el desempleo y la degradación social como forma de vida urbana, al menos para millones de latinoamericanos que se encuentran condenados a la pobreza estructural y el abandono institucional-gubernamental.

Por otro lado, la esperanza es pensar que la democracia que tenemos, deficitaria, es perfectible. Que, como la han hecho algunas administraciones y gobiernos locales en Brasil, Ecuador y Colombia, la democracia se puede recuperar y volcarse a la ciudadanía de forma innovadora y creativa. La voluntad política de las clases políticas desde un alcalde, gobernador o presidente, es vital para romper las inercias de las malas administraciones y contrarrestar la inseguridad, la violencia, la degradación, la desintegración y la desigualdad. La apuesta es revisar si la perfectibilidad de la democracia en América Latina puede ser gestionada desde abajo, incluyendo e integrando a la ciudadanía organizada y, sobre todo, a la desorganizada. Los rumores ciudadanos que revientan las calles en protestas y manifestaciones son una muestra del hartazgo y desesperación de los ciudadanos inconformes y descontentos de sus gobiernos y políticos, de la pobre gestión y corrupción que empieza a hacer agua en los gobiernos locales y centrales. Hoy día, algunas ciudades de Brasil, como Sao Paulo, son un claro ejemplo de ello.

Así, se busca, a partir de nociones como desgobierno, descontento, decrepitud, déficit ciudadano y otros, como democracia perfectible y clase política, hacer una reflexión sobre el sentimiento ciudadano respecto a sus gobernantes. Partimos de la premisa de que se ha entrado en un régimen de democracias deficitarias que quedan debiendo a sus ciudadanos. La intención es pensar en la búsqueda de la política (Bauman: 2002) como fuente de intervención y mediación entre gobiernos y ciudadanos. La política ha perdido centralidad frente a la economía de mercado y los sistemas financieros; es la economía y sus mercados la que está organizando y estructurando la vida en sociedad de los ciudadanos. Una primera reflexión sería la de recuperar la política y desplazar al mercado como forma organizadora y gestora de los asuntos públicos de la ciudad. Necesitamos sociedades con mercados, no sociedades de mercado, como lo dijera el presidente de Ecuador Rafael Correa en la entrevista que le hiciera Ana Pastor para CNN en español el pasado marzo de 2012.

Clase política, gobierno de la ciudad y decrepitud

Las ciudades latinoamericanas están cambiando. De la “ciudad frontera”, con una lógica de urbanización basada en la expansión de las periferias y la metropolización industrial,

se ha pasado a una “ciudad en red”, resultado de la globalización, reforma del Estado y cambios demográficos. En este nuevo contexto, se perciben en la región dos modelos políticos de gobierno de la ciudad: el de la ciudad empresarial privada, que recurre al mercado para inyectarle eficiencia a la gestión urbana, y el de la ciudad inclusiva, basada en una revalorización del espacio público y la promoción de derechos. La exitosa experiencia de algunas fuerzas de izquierda demuestra que es posible una perspectiva distinta de gestión de la ciudad (Carrión: 2010).

La abrumadora actualidad latinoamericana con sus índices de inseguridad, violencia, abandono y pobreza, nos hacen preguntarnos cuáles son los grandes retos de las democracias latinoamericanas respecto de estos temas, si sabemos que la pobreza y la violencia atentan contra el ejercicio de la ciudadanía y en consecuencia afectan a la estabilidad democrática. La región latinoamericana registra índices alarmantes de pobreza y precarización laboral, lo cual genera desigualdad social y segmenta a las poblaciones en ricos y pobres, siendo los últimos una mayoría acorralada por la inseguridad en sus barrios, centros de trabajo y expuestos a niveles extraordinarios de violencia crónica. Entendemos por violencia crónica lo que nos sugiere Marilena Adams en su estudio:

[La violencia crónica ocurre en] aquellos contextos en que los niveles de violencia se miden en las dimensiones de intensidad, espacio y tiempo. Una definición posible es aquella en que las tasas de muerte violenta al menos duplican la tasa promedio prevaleciente en los países ubicados en la misma categoría de ingreso, en que estos niveles se sostienen a lo largo de un período de cinco años o más y en condiciones en que los actos de violencia que no necesariamente causan la muerte registran altos niveles en diversos espacios de socialización, tales como el hogar, el barrio y la escuela, contribuyendo así a la reproducción de violencia a lo largo del tiempo (Pearce en Adams: 2011: 12)

Pero, ¿cuáles son las respuestas, programas y políticas de los gobiernos locales y autoridades encargadas de brindar seguridad y bienestar a la población? En realidad, muy pocas. Una inmensa mayoría de gobiernos locales no cuentan con políticas públicas de prevención de la criminalidad y, por el contrario, apelan a la construcción de esquemas y modelos punitivos para gestionar más cárceles, penas más duras, más policías y mejor armados, entre otras políticas de vigilancia que tienen que ver con nuevos dispositivos de video-vigilancia y biometría como formas de control sobre poblaciones y grupos delincuenciales. El problema de estas medidas es su marcada criminalización de la pobreza y la juventud.

A diario, en las ciudades de América Latina se registran detenciones arbitrarias, revisiones y cateos sin orden judicial, se estigmatiza la pobreza y se etiqueta social y culturalmente a los sectores de la población de ingresos más bajos. Por otro lado, los jóvenes se ven hostigados y perseguidos por las policías locales y otros cuerpos de seguridad violentando su derecho al libre tránsito y esparcimiento por la ciudad. En muchas ocasiones, estas detenciones, retenes, cateos y otras formas de vigilancia corporal, terminan en abuso policiaco y de autoridad. Los jóvenes o individuos de bajos recursos son retenidos y encarcelados por faltas administrativas, condenados a pagar una fianza o, en caso de no tener recursos económicos, con horas de cárcel.

Los gobiernos locales han cambiado dentro de los cabildos y ayuntamientos las ordenanzas públicas criminalizando a los jóvenes y los pobres. La vigilancia de la ciudad atraviesa por dispositivos y nuevas tecnologías políticas de vigilancia y control social que

atentan contra la ciudadanía. Una serie de nuevas prohibiciones y ordenanzas públicas aparecen para los ciudadanos. Los horarios, espacios públicos y edificios son gestionados con lógicas securitarias que no previenen la delincuencia, solo la persiguen y sancionan una vez desplegada y causado el daño al ciudadano. Ante la realidad decadente de los municipios, se cree en que estos deben cambiar conceptualmente su fundamento.

Conceptualmente el municipio debe recuperar la condición de cercanía. En este caso la comunicación debe expresarse a través de tres mecanismos: la creación de nuevas formas institucionales de representación, que permitan reducir las distancias; el desarrollo de propuestas de descentralización del aparato de gobierno municipal y la ampliación de las formas de participación de la población en el gobierno local (Carrión: 2010: 216).

Quizás una de las nuevas formas en las que se puede reconceptualizar el municipio como figura de gobierno histórica es en la propuesta de municipio participativo: uno que prevea y aminore la violencia, desempleo e inseguridad ciudadana. Pero las tasas de desempleo no abonan a la reducción del problema de la violencia y la inseguridad ciudadana, además de que al desempleo se suma el empleo informal del 40 % de la población económicamente activa (PEA) al nivel latinoamericano. En algunos países como México, la informalidad ha llegado al 60 % de los empleos; solo el 40 % de la PEA tiene un empleo formal con prestaciones y beneficios sociales, lo cual precariza al trabajador y sus familias, generando con el tiempo males estructurales como la desigualdad y la exclusión social en zonas urbanas enteras. Los gobiernos locales y sus autoridades no han sido capaces de resolver el desabasto de alimentos, la cobertura de los servicios públicos (electricidad, gas, agua potable, drenaje, alcantarillado) y de salud. Los presupuestos anuales de egreso de buena parte de las administraciones en los ayuntamientos se desvían a los rubros de seguridad pública y pagos de nómina de los servidores públicos, que pueden llegar a significar más de la mitad del erario público. Poco queda entonces de recursos para obra social y políticas públicas encaminadas a la gestión de la seguridad ciudadana.

Las autoridades con alta tradición populista o asistencial combaten la pobreza con entrega de despensas o paquetes de alimentos y cobijas y en algunas ocasiones materiales para la autoconstrucción de viviendas. Esos programas de dádiva gubernamental se convierten en dispendio electoral y partidista, allegándose la voluntad y los votos de los ciudadanos. Así, los gobiernos locales gestionan la pobreza y el desabasto de urbanizaciones enteras que han caído en el abandono gubernamental y que viven en la informalidad del día a día rodeados de urbanizaciones inseguras, violentas y marginadas de cualquier centralidad urbana y de servicios. Las redes de la delincuencia organizada hacen de estas villas miseria, pueblos jóvenes, cinturones de pobreza, chabolas y favelas un espacio ideal para instalarse social y económicamente.

¿Qué podemos esperar si sometemos a los gobiernos locales a una evaluación a partir de los llamados derechos de cuarta generación, los derechos urbanos que, desde la categoría central del derecho a la ciudad, plantean una idealización muy lejana a la realidad de América Latina? Jordi Borja, en un extenso trabajo sobre el derecho a la ciudad enuncia lo siguiente para hacer de estos derechos una realidad:

El “derecho a la ciudad” integra derechos relativos al entorno físico como la vivienda, el espacio público, el transporte, el ambiente, etc., que condicionan derechos individuales y colectivos de carácter social o político, es decir la efectividad del estatuto

ciudadano. Pero también se integran en el derecho a la ciudad derechos políticos y sociales que a su vez condicionan la inserción en la ciudad como la igualdad político-jurídica, la identidad personal y colectiva de las minorías, el salario ciudadano o renta básica, la formación continuada, etc. El derecho a la ciudad, pues, es un conjunto de derechos formales y materiales que configuran la ciudadanía (Borja: 2013: 145).

Los ciudadanos del siglo XXI en América Latina enfrentan como nunca antes la inseguridad y la violencia como parte de los paisajes urbanos de una inmensa lista de ciudades latinoamericanas, barrios abandonados por los gobiernos y autoridades se sumergen en la muerte social de toda política que construya ciudadanía. El miedo social invade hogares, barrios y urbanizaciones enteras ante las políticas de abandono de gobiernos y sus clases políticas decrepitas. El abandono aparece como el signo-síntoma de las poblaciones de más bajos ingresos, las que son caracterizadas como pobres (en cualquiera de sus dimensiones de pobreza: alimentaria, patrimonial, de capacidades, extrema, etcétera). La exclusión, la desigualdad social y el abandono generan contextos sociales y urbanos decadentes. La falta de servicios, equipamiento urbano, transporte público de calidad y centros de trabajo y estudio cercanos a barrios y comunidades con bajos ingresos generan urbanizaciones fallidas.

La gestión de la ciudad en América Latina pasa por distintas experiencias y voluntades políticas. En algunas ciudades de Colombia, Brasil, Ecuador, Nicaragua y Uruguay las clases políticas y dirigentes están intentando otras formas de combate a la inseguridad ciudadana y la violencia urbana. Están reinventando sus ciudades como municipios participativos. Por desgracia, el resto de los países no conoce o no desea cambiar sus estrategias o prácticas de políticas públicas por aquellas que partan de la inclusión de los ciudadanos en los asuntos públicos de la ciudad; podemos hablar claramente de decrepitud generalizada de las clases políticas. Encerrados en sus oficinas, de corredores de seguridad en edificios resguardados y video vigilados, no comprenden o invisibilizan las realidades sociales de alta criminalidad y violencia crónica. Su forma más efectiva de combate a la criminalidad y la violencia es negarlas.

Las clases políticas y los gobiernos locales aparecen poco entusiasmados con nuevas formas de pensar la ciudad y los problemas de la violencia y la inseguridad. Las agendas locales se conforman de otros contenidos alejados de la ciudadanía y de las necesidades de primer orden. Los chismes y los dimes y diretes acaparan la atención de la clase política en los medios tradicionales y digitales; la prensa escrita coadyuva en hacer de la política todo un espectáculo. Los asuntos públicos de la ciudad se ven desplazados a segundo plano o papel secundario para las clases dirigentes que están ocupados preparando su próxima campaña electoral, abandonando la posibilidad de construcción de agendas ciudadanas que tengan como ejes:

- a) agenda cultural y juvenil;
- b) agenda de seguridad ciudadana;
- c) una agenda de política urbana en zonas marginadas con altos índices de desigualdad y precarización social;
- d) agendas para la atención de la salud y la educación en zonas con alta criminalidad y violencia crónica.

Se privilegian corredores de seguridad para las empresas y centros de trabajo (transnacionales), corredores turísticos y urbanos donde se encuentran las clases de altos

ingresos y mejor calidad de vida. Aparecen las policías turísticas y bancarias, descuidando la policía comunitaria y de proximidad. Se endurecen las ordenanzas públicas, criminalizando a jóvenes y poblaciones en pobreza urbana, además de condenar a la ciudad a la descomposición y fragmentación social, complaciendo el amurallamiento de las ciudades y propiciando la segregación residencial y social. Los más débiles en términos de economía enfrentan los peores malestares de la criminalidad y la violencia, los efectos de “migración cucaracha” que producen los amurallamientos urbanos dejan al descubierto a las urbanizaciones de las periferias, abiertas a la delincuencia, de millones de trabajadores urbanos e industriales que dejan solas sus casas durante las largas jornadas de trabajo y enfrentan los robos a casa-habitación por no contar con bardas, murallas o rejas que las protejan de los delincuentes en su ausencia. No cuentan con vigilantes y video vigilancia que mantenga alejados a los delincuentes y criminales.

La clase política y empresarial avanza hacia la decrepitud en su relación de cercanía con los ciudadanos. Al igual que los gobiernos locales que toman distancia de sus habitantes: solo se comunican con los ciudadanos para el cobro de los prediales, impuestos y permisos para licencias de conducción de autos o permisos de construcción o para la apertura de alguna pequeña empresa. Los recibos de cobro de los municipios y ayuntamientos llegan con rapidez y sorprendente celeridad a los domicilios de los ciudadanos, cargados de intereses y penalizaciones en caso de omitir el pago o retrasarlo. Los descuentos son escasos y bajos porcentualmente. La evasión de impuestos o pagos a las autoridades son muy penalizadas y perseguidos; en cambio, los criminales muchas veces están sueltos. Estas tensiones entre ciudadanos y sus autoridades generan descontento y sinsabores ciudadanos. En el caso mexicano, el doctor Gerardo Esquivel Hernández, quien es profesor-investigador de El Colegio de México, menciona en su investigación de 2015, *Desigualdad extrema en México. Concentración del poder económico y político*, que solo “el 10 % más rico de México concentra el 64.4 % de toda la riqueza del país”. Y añade lo siguiente:

Nuestro país está inmerso en un ciclo vicioso de desigualdad, falta de crecimiento económico y pobreza. Siendo la decimocuarta economía del mundo, hay 53.3 millones de personas viviendo la pobreza. La desigualdad ha frenado el potencial del capital físico, social y humano de México, haciendo que en un país rico sigan persistiendo millones de pobres. ¿En dónde está esa riqueza mexicana? En términos de renta y capital, se encuentra concentrada en un grupo selecto de personas que se han beneficiado del poco crecimiento económico del que ha gozado México en las últimas dos décadas. Así, mientras el PIB per cápita crece a menos del 1 % anual, la fortuna de los 16 mexicanos más ricos se multiplica por cinco (Esquivel: 2015: 5).

La concentración de la riqueza por parte unos cuantos como en el caso mexicano, es posibilitado gracias a los apoyos directos de las clases gobernantes, que dan todas las condiciones para que los negocios de un grupo selecto de personas prosperen en medio de la adversidad económica. Por ello, la percepción de la ciudadanía respecto a sus gobiernos y gobernantes es cada vez más negativa; la decrepitud y falta de voluntad política aparecen como la marca del ejercicio de la política una vez que se es gobierno. La teoría política como ciencia del gobierno requiere actualizarse frente a los abandonos y desgobiernos de autoridades y representantes populares. Nos preguntamos, ¿dónde quedó el coraje cívico que promovían los grandes autores de esta disciplina? Si, como menciona el politólogo Javier Roiz, “La teoría política se convertía así de verdad en la

ciencia del gobierno –de quién manda y quién obedece– y de cómo desmontar la tiranía, ambos esfuerzos basados en una apuesta por la vida que se apoya en la inteligencia y el coraje cívico” (Roiz: 2014: 133).

Desgobierno, descontento y déficit ciudadano

Hasta aquí hemos hablado de los procesos sociales que, pensamos, están caracterizando a las sociedades-ciudades latinoamericanas, incluidas sus consecuencias construidas como malestares que impactan directamente en las poblaciones más desprotegidas. Están solos los habitantes, desatendidos de sus gobiernos locales y políticas de proximidad que ya no representan las necesidades de los ciudadanos, sino que se distraen en las tramas electorales, las candidaturas partidistas y de corrupción en las que frecuentemente se ven envueltos los políticos.

Por ello, se cree pertinente la pregunta que se formuló hace años el profesor Armando Silva en su libro *Imaginario urbano: ¿Qué es ser urbano en nuestras sociedades de América Latina?*, a la que respondió:

No puede afirmarse que ello corresponde tan solo a una condición material de quienes habitan la ciudad. Si lo anterior es cierto, no es suficiente. Por eso mismo existen razones, que podrían llamarse fundamentales, para buscar otras justificaciones que entreguen demostraciones más convincentes. Con lo dicho quiero resaltar que me propongo estudiar la ciudad como lugar de acontecimiento cultural y como escenario de un efecto imaginario (Silva: 2006: 55).

Es decir, si nos sumamos a la propuesta de Armando Silva y sus imaginarios urbanos o lo que él llama urbanismos ciudadanos, nos colocamos en la posición de tratar de entender la ciudad no solo desde nuestra experiencia física y material, sino de imaginarla. Aun así, aunque seamos capaces de imaginar la ciudad, el desánimo de los ciudadanos enfrenta un doble reto: uno es la autogestión ante el abandono de las instituciones gubernamentales en políticas de salud, educación, cultura, empleo y calidad de vida; es decir, la autogestión sin recursos, solo contando con la suma de muchas voluntades ciudadanas de vecinos que se reúnen para plantear cómo reducir su inseguridad ciudadana y marginalidad social. Otro, la protesta y denuncia ciudadana ante la falta de gestión ante los asuntos públicos de la ciudad. Esta confronta a los ciudadanos con sus autoridades locales y políticos, lo que puede provocar enfrentamiento con los cuerpos policiales y de seguridad de la ciudad y la represión por parte de la misma.

En este contexto de “política de abandono” (Herrera: 2007), los ciudadanos frustrados y descontentos pueden subir el tono de sus demandas o autogestiones. Todos pierden, sobre todo los habitantes de las zonas urbanas degradadas. Las poblaciones de la ciudad sometidas a estas lógicas de abandono institucional no pueden practicar su ciudadanía de manera plena en lo civil, político-jurídico y social. Se genera, entonces, un déficit ciudadano, una ciudadanía disfuncional y mediada por las malas gestiones locales y políticas públicas poco claras y efectivas. El déficit ciudadano no abona a la democracia como forma de cultura política íntimamente relacionada con las formas y prácticas de vida urbana.

Se crean zonas urbanas completas dentro de la ciudad o en sus márgenes (la mayoría de las veces) de desgobierno, sin autoridad pública en términos de gestión y administración. La seguridad ciudadana es precaria e insuficiente; las calles mal alumbradas, y en

muchos casos sin pavimento, dificultan su uso como espacio público seguro y ciudadano. En muchas ciudades de América Latina, especialmente en América Central y países como México, las mujeres sufren violaciones y violencia verbal, además de una serie de delitos que pueden ir desde el asalto, el cobro de piso (peaje del barrio o colonia) y el hostigamiento sexual, hasta el homicidio, lo que desde la perspectiva de género se ha trabajado como feminicidio. Desde donde se escribe este breve ensayo, los feminicidios han sido uno de los principales problemas sociales desde 1993 a la fecha sin tener los resultados esperados, al menos los que esperaban las organizaciones y los y las familiares de las víctimas.

Así, la ciudadanía está incompleta, los vacíos de autoridad dejados por parte de los gobiernos locales y estatales (provinciales o departamentales) son llenados por pequeños grupos de delincuencia organizada con redes de prostitución, narcotráfico y otros tipos de delitos que ponen en situación de alto riesgo a las poblaciones de estos espacios geográficos representados en barrios, chabolas, favelas, pueblos jóvenes, barriadas en barrancos, villas miseria o cinturones de marginalidad en las periferias y zonas suburbanas de las ciudades centrales. Estos desgobiernos precarizan aún más la vida de sus habitantes, recrudecen las relaciones sociales entre los ciudadanos de la ciudad y los convierten en víctimas de los peores malestares sociales, económicos y ambientales de las urbanizaciones que especulan con la vida de los trabajadores de bajos ingresos, tratándolos como desecho o producto descartable.

Los desgobiernos en las ciudades son abundantes y evidentes; los desgobiernos de las ciudades latinoamericanas son parte de las historias de vida de miles de habitantes de las barriadas fuera de toda centralidad urbana. Surgen malas experiencias de vida que hablan de robos, homicidios, violaciones, peleas domésticas, enfrentamientos entre pandillas y todo esto sin la presencia de ningún tipo de autoridad gubernamental, que cuando esporádicamente aparecen son como testigos silenciosos de estos desgobiernos que han terminado por sobrepasar la capacidad operativa de sus policías y cuerpos de investigación y administración de justicia.

Los descontentos ciudadanos se han hecho manifiestos en algunas ciudades acosadas por la violencia urbana y social. En Colombia, México, Honduras, Venezuela y otros países de la región, el crimen organizado se apodera de zonas enteras de barriadas empobrecidas y sin futuro, dejando en la delincuencia organizada los asuntos públicos de barrios enteros. El narcotráfico empieza a gestionar la vida cotidiana de millones de ciudadanos, suple funciones gubernamentales de vigilancia y control de los espacios públicos, comercio informal y formal bajo cuotas de “protección” y permisos de venta y comercialización de todo tipo de artículos, además de controlar los usos de suelo mediante el hostigamiento y amedrentamiento de los colonos y habitantes de las periferias urbanas.

El narcotráfico ha tendido toda una red alterna de gestión en la ciudad, otorga empleos a miles de jóvenes desescolarizados y desempleados, genera redes de solidaridad y camaradería supliendo las relaciones familiares y de trabajo. En Colombia se ha popularizado la expresión “los descartables”. Estas redes de amistad asumen y sustituyen a la familia como institución microsociedad encargada de la socialización primaria de miles de jóvenes precarios y desplazados de los centros de trabajo, la familia y la escuela. Así, la academia latinoamericana comienza a llamarlos “ceros social”, lo que los coloca y declara en una “muerte social”. Qué mejor expresión para ejemplificar la situación de estos millones de jóvenes latinoamericanos que habitan las peores urbanizaciones de la región. Tani Marilena Adams lo toma de Henrik Vigh.

El concepto de muerte social que ofrece Henrik Vigh resulta útil para profundizar nuestra comprensión de la situación que enfrentan los jóvenes –varones jóvenes, en particular– en sus contextos actuales. El autor utilizó el término para describir la situación que encaran los jóvenes en Guinea Bissau, donde un largo período de decaimiento económico hizo que un aspecto central de sus vidas fuera “la ausencia de la posibilidad una vida digna”. Vigh sugirió que en estos casos la muerte no es física, sino social (Adams: 2013: 35).

Sin espacios culturales y de esparcimiento, faltos de áreas verdes y deportivas, expuestos a la violencia urbana, a la programación de las vidas en los medios de comunicación, que generan estereotipos y formas de vida basadas en el consumismo y la compra superflua y volátil, la muerte social aparece como un elemento de las poblaciones de jóvenes en las áreas marginadas, un rasgo que desgraciadamente parecería ser constitutivo de millones de jóvenes latinoamericanos. Veamos la siguiente cita:

En términos de distribución demográfica de Latinoamérica, si bien se ha entrado en una fase de desaceleración de la tasa de nacimiento y defunciones, es decir, en una fase transitiva hacia el envejecimiento de la población, la región aun es y será en el corto plazo una sociedad preponderantemente joven. En Latinoamérica y el Caribe la población juvenil (entre 15 y 29 años) representa alrededor del 28 % del total de habitantes (Tejeda y Vânia, 2008), con aproximadamente 140 millones de jóvenes. Y la edad promedio en la mayoría de los países de América Latina y el Caribe es aún menor de 20 años (Sen y Kliksberg, 2007)... Una de las consecuencias directas de la falta de integración de los jóvenes al mundo del trabajo es la pobreza. De 140 millones de jóvenes latinoamericanos y caribeños (entre 15 y 29 años) cerca del 41 % (58 millones) vivía bajo la línea de la pobreza en el 2002 e incluso el 15 % (21 millones aprox.) se encontraban bajo la línea de la indigencia para ese año (Sen y Kliksberg, 2007). Eso sí, con una gran dispersión entre los países de la región que va desde 13,1 % de jóvenes pobres y 2,4 % de jóvenes indigentes en Chile, a 66,3 % y 40,3 % respectivamente, en Honduras (CEPAL/OIJ, 2008). (ONU-Habitat: 2011: 14-17).

Los jóvenes y los (in)migrantes frente a la ciudadanía

En la actualidad, los inmigrantes aparecen como forasteros amenazadores que llaman a las puertas, las echan abajo o las cruzan a hurtadillas para entrar en sociedades que son más ricas que aquellas de las que proceden. Los países receptores de la inmigración actúan como si no formaran parte del proceso, pero, de hecho, son parte de él. Las migraciones internacionales se sitúan en la intersección de diversos procesos económicos y geopolíticos que vinculan a los países implicados, no son el simple resultado de la búsqueda individual de mejores oportunidades (Sassen: 2013).

El descontento ciudadano (si aún podemos hablar de ciudadanía) se coloca como parte de la agenda pública de los gobiernos y políticos del momento. Desconcertados, sin saber qué hacer, promueven políticas de seguridad más duras y extremas; los jóvenes y los migrantes son las primeras víctimas de estas prácticas gubernamentales. La criminalización de los jóvenes y los migrantes va en aumento en muchas ciudades del sur global; se modifican las normativas y reglamentos de ayuntamientos y gobiernos provinciales, departamentales o estatales para incluir nuevas faltas y sanciones admi-

nistrativas contra la protesta o la lucha social. A los migrantes llegados del campo o áreas rurales se les observa con recelo ante su permanencia temporal en los lugares de tránsito y cruce hacia las zonas fronterizas o las grandes metrópolis en busca de trabajo y mejores niveles de ingreso y vida. “Cualquier área urbana del mundo ha visto cómo se inflaba su burbuja inmobiliaria al tiempo que aumentaba sin freno la afluencia de inmigrantes empobrecidos, a medida que el campesinado rural se veía desposeído debido a la industrialización y comercialización de la agricultura” (Harvey: 2013: 31).

Los jóvenes sin empleo y escuela, apartados de la sociabilidad que dan el trabajo y la escuela, aprenden otras formas de relacionarse y vivir la ciudad. Las ciudades fronterizas en el norte de México, con sus 3200 km de frontera con los Estados Unidos, son espacios de llegada de miles de inmigrantes centroamericanos (500 000 anuales) y de migrantes internos que en el mejor de los casos tienen un par de meses de trayectoria buscando el cruce. Llegan a ciudades como Tijuana, Nogales, Ciudad Juárez, Aguaprieta, Nuevo Laredo, entre otras, al borde del agotamiento físico y emocional. Las violaciones son frecuentes en mujeres y hombres que son víctimas del crimen organizado y las propias autoridades migratorias de todos los países por donde cruzan en su largo viaje. Incluso, en los últimos años, se ha extendido la práctica del uso de pastillas anticonceptivas en las mujeres migrantes, para no quedar embarazadas.

En su mayoría son jóvenes migrantes, mujeres y hombres buscando un lugar dónde trabajar y ganar algo de dinero para reenviar a sus lugares de origen. A su llegada, son subcontratados y subempleados en actividades mal remuneradas y sin ningún tipo de prestación; se convierten, ya dentro de los Estados Unidos, en extranjeros sin ningún tipo de ciudadanía, es decir, sin derechos. Esta situación los expone al extremo social de sufrir las peores injusticias, que llegan al encarcelamiento, por faltas menores o administrativas que se pagarían con cualquier fianza, pero su condición extrema como inmigrantes radicaliza su experiencia, siendo sometidos a maltrato y abuso.

Lo mismo sucede con los jóvenes y adultos que, sin trabajo, dejan sus comunidades para ir a la “gran ciudad” en busca de mejores ingresos. En toda América Latina, los desplazamientos humanos de las áreas rurales a la ciudad se transforman en la sangría poblacional de pueblos y comunidades enteras. Surgen comunidades de mujeres y ancianos que, sin varones, deben hacer el doble trabajo para la cosecha y cultivo de los campos. Los niños sufren abandono por parte de los adultos y en muchos casos jamás vuelven a ver a los padres, quienes rehacen sus vidas en los lugares de destino y en olvidan a sus familias. En este contexto de alta movilidad poblacional, la ciudadanía no se ejerce, mucho menos los llamados derechos de cuarta generación, como son: el derecho a la ciudad y el derecho a la seguridad humana. Ni los derechos urbanos ni los derechos de una seguridad ciudadana están al alcance de estas poblaciones flotantes, que debido a su condición migratoria, son vulnerables a la pobreza y exclusión social.

Qué implica pensar los derechos a la ciudad, según Jordi Borja:

El derecho a la ciudad es de uso reciente en el debate actual sobre la ciudad y su futuro. El término, en su forma actual o con palabras similares, se había empleado a veces como “ampliación” del derecho a la vivienda, a lo que se añadían los servicios básicos vinculados a aquélla como la red de saneamiento, electricidad, etc. y otros servicios de naturaleza universal (necesarios para todos) como transporte, escuela, puesto sanitario, etc. actualmente, a inicios del siglo XXI, el “derecho a la ciudad” no se limita a reivindicar elementos básicos para sobrevivir en el entorno urbano. Propone un concepto de ciudadanía para la ciudad de hoy de mañana. Entiende la ciudadanía como

igualdad de derechos sociales, políticos, económicos y culturales y los concreta en su relación con la ciudad como marco físico en el que se ofrecen mediante las políticas públicas un conjunto de bienes y servicios (Borja: 2013: 265).

Por otro lado, el derecho a la seguridad humana incluye el derecho a la seguridad ciudadana, aquella que no está regida únicamente por la rectoría del Estado, sino que es compartida con corresponsabilidad por parte de los ciudadanos. Pero, por desgracia, y por lo general, los migrantes/inmigrantes se establecen en zonas marginales y periféricas de las ciudades, formando nuevas colonias o barrios sin servicios públicos ni acceso a ningún tipo de centralidad urbana que los conecte al tejido urbano de la ciudad. Esto los expone a los abusos de las autoridades y bandas delictivas, ya sea del crimen organizado o delincuencia habitual de las ciudades. Los derechos son algo lejano y extraño para estas comunidades migrantes; son mirados en los centros comerciales y residenciales con desconfianza social y por lo general se les evita amurallando los barrios y fraccionamientos de altos ingresos. Se contratan y trabajan de manera precaria. Todo lo anterior provoca frustraciones y descontentos. El sueño inicial al momento de migrar ha desaparecido o simplemente ya no es el mismo.

Nada de lo escrito anteriormente abona y nutre a la ciudadanía: se convierte en una latente demanda de derechos ciudadanos y los llamados derechos de cuarta generación. Nunca como antes en la historia reciente de la desigualdad social, hubo tal amenaza a la vida de las democracias latinoamericanas. Ejércitos de desplazados, descontentos y desahuciados se agolpan en las principales calles y avenidas de las ciudades de la región; las drogas, el comercio informal, la delincuencia (en todas sus formas sociales y criminales), la desescolarización, la desafiliación (por falta de trabajo) y otras expresiones sociales del malestar, se concatenan en las periferias sin ciudadanía. Para millones de latinoamericanos, la ciudadanía sigue siendo una ficción, una simulación o, en el mejor de los casos, un sueño.

La más afectada de las instituciones es, quizás, la democracia. La crisis de representación y gestión por parte de los que ocupan los cargos de elección popular es evidente. Los políticos, una vez electos, se desprenden literalmente de los votantes, de su electorado y, lo peor de todo, de sus ciudadanos. Conocemos de casos de corrupción por parte de la clase política y dirigente en muchas de las ciudades; el caso más reciente y sonado es el del presidente del Comité Ejecutivo del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en el Distrito Federal en México, quien es acusado de dirigir y financiar con recursos públicos una red de prostitución que usaba al partido como pantalla. Por ahora ha sido cesado temporalmente de su cargo partidista, pero como casi siempre, la cosa no llegará más lejos.

Entonces, hablamos de una democracia deficitaria por doble vía. Por un lado, los representantes populares y dirigentes de los partidos políticos han dejado de representar a la ciudadanía y sus necesidades; por otro, la ciudadanía muestra un desgaste y desconfianza ante las instituciones democráticas, es decir, hablamos de un déficit democrático. El siglo XXI será su momento histórico de reestructuración, preguntándose por qué tipo de democracia y ciudadanía se quiere refundar. El reto es monumental si, como sabemos, los políticos actuales no están intelectualmente a la altura de las circunstancias. Aun así, hay cosas por hacer, ya que, para esperanzas de todos, la democracia es perfectible.

Por ejemplo, llegan rumores desde algunas ciudades europeas y en Sudamérica, donde algunos municipios y alcaldías hacen énfasis en la necesidad de reconfigurar los intereses para la gestión ciudadana y no para los promotores inmobiliarios y los especuladores. Autores como Jordi Borja, Mike Davis y David Harvey han realizado esfuer-

zos exhaustivos en sus últimas publicaciones describiendo y reflexionando sobre las revoluciones y contrarrevoluciones urbanas y los derechos urbanos materializados en el llamado derecho a la ciudad. Estos rumores, como lo escribe Harvey en uno de sus recientes libros, crean “espacios de esperanza”. Desde la Antigüedad, la ciudad griega y romana, pasando por las ciudades medievales y barrocas, llegando a las ciudades modernas de corte industrial y posteriormente postindustrial, albergó formas de gobierno democráticas o comunitarias, y desde entonces, la democracia ha sido perfectible. Es el reto para las ciudades del siglo XXI.

A modo de reflexión final: la democracia perfectible, rumores ciudadanos

La democracia representativa en América está en crisis. La ventaja es que es perfectible, se puede remediar, pero requiere del esfuerzo ciudadano. La ciudadanía es aquella entidad única que puede mejorarla y hacerla funcionar de nuevo (en aquellos lugares donde realmente funcionó) para la cual se requiere participación, compromiso y, como decía Hannah Arendt, una buena dosis de coraje cívico. La democracia como bien común terminó quedando en manos de unos cuantos políticos corruptos y despilfarradores. ¿En dónde radica entonces realmente el problema? ¿Sería tan fácil como pedirles que le regresen la democracia de nuevo a la ciudadanía e iniciar su recomposición?

Los rumores ciudadanos hablan de que en muchas regiones de América Latina se ha intentado, en las últimas décadas, recuperar la democracia sin mucho éxito, debido a la respuesta agresiva y violenta de los gobiernos locales y las clases dirigentes que se atrincheran en dichos gobiernos. La recuperación y reapropiación de la democracia no será tarea fácil, pero debe iniciarse por todos los medios, como lo señala en su último libro David Harvey, *Ciudades rebeldes*. El autor plantea una nueva revolución urbana que integre el derecho a la ciudad. Al parecer, la revolución y rebeldía de las ciudades será el único medio disponible para recuperar no solo las ciudades y sus gobiernos locales, sino la democracia en sí. Es en las ciudades donde radica el ejercicio de la ciudadanía y en ellas, por su proximidad con las autoridades locales, la representación es directa.

Como se mencionó anteriormente, encontramos un déficit ciudadano que provoca una democracia deficitaria en la que es difícil confiar y creer cuando los gobiernos y autoridades se enriquecen a costa de los ciudadanos y sus impuestos. El desgaste de las instituciones políticas y sociales es claro en muchos países de la región. El desorden administrativo, la falta de planeación urbana y la ausencia de voluntad política por resolver las necesidades de la población, hace mella en las esperanzas de una verdadera representación política que dé prioridad a los temas de inseguridad, violencia y crisis económica. El desempleo que hemos descrito antes, la precariedad y la pobreza, son una consecuencia inmediata de la crisis brutal de las instituciones políticas y la democracia.

¿Cómo arreglar un mundo tan complejo que no deja de crecer y demanda nuevas necesidades y servicios cuando la democracia ha dejado de ser funcional, al menos para una inmensa mayoría, y solo es usada para unos cuantos que aprendieron a vivir de ella apelándola desde la tribuna o el curul? El verdadero riesgo es dejar a la democracia en un estado terminal donde sea imposible recuperarla como forma de gobierno. Si han sido los hombres quienes la han dejado en ese estado de decadencia y descomposición, deben de ser los hombres y mujeres quienes la recuperen y la pongan al servicio de todos.

Finalmente, habrá resistencias e inercias que vencer: la corrupción y los corruptos, además de los corruptores, los vividores, los que han visto en la democracia una forma

de sacar provecho y servirse de ella de mala manera. La tarea no será fácil ni rápida, llevará tiempo limpiarla y sanearla, drenando desde su interior la escoria que la debilita y corroe. Son políticos, dirigentes, gobernantes, autoridades y, por desgracia, muchos servidores públicos quienes la han desacreditado. La democracia hoy enfrenta adversarios fuertes y poderosos que no están dispuestos a entregarla a los ciudadanos. Estos deberán pelear por ella, como ha sucedido a lo largo de su historia.

Bibliografía

- Adams, Tani Marilena (2012). *La violencia crónica y su reproducción: tendencias perversas en las relaciones sociales, la ciudadanía y la democracia en América Latina*, Woodrow International Wilson Center for Scholars, Estados Unidos.
- Bauman, Zygmunt (2011). *Daños colaterales. Desigualdades sociales en la era de la globalización*, FCE, México.
- Bauman, Zygmunt (2014). *¿La riqueza de unos pocos nos beneficia a todos?* Paidós, Barcelona.
- Bauman, Zygmunt (2006). *Vidas desperdiciadas. La modernidad y sus parias*, Paidós, Barcelona.
- Bauman, Zygmunt (2005). *Trabajo, consumismo y nuevos pobres*, Gedisa, Barcelona.
- Bauman, Zygmunt (2002). *En busca de la política*, FCE, México.
- Beck, Ulrich (2003). *Un nuevo mundo feliz. La precarización del trabajo en la era de la globalización*, Paidós, Barcelona.
- Borja, Jordi (2013). *Revolución urbana y derechos ciudadanos*, Alianza Editorial, Madrid.
- Borja, Jordi (2010). *Luces y sombras del urbanismo de Barcelona*, Editorial UOC, Barcelona.
- Borja, Jordi (2003). *La ciudad conquistada*, Alianza Editorial, Madrid.
- Borja, Jordi, Mireia Belil y Marcelo Corti (editores) (2012). *Ciudades, una ecuación imposible*, Icaria, Barcelona.
- Carrión Mena, Fernando (2010). *Ciudad, memoria y proyecto*, Olacchi-Municipio Distrito Metropolitano de Quito, Quito.
- Carrión Mena, Fernando (1993). *De la violencia urbana a la convivencia ciudadana*. PCU. Serie Gestión Urbana 2. *Ciudad y violencias en América Latina*, pp. 5-22.
- Carrión Mena, Fernando y Manuel Dammert Guardia (compiladores) (2009). *Economía política de la seguridad ciudadana*, Flacso-Municipio Metropolitano de Quito, Quito.
- Carrión Mena, Fernando y Johanna Espín (compiladores). (2009). *Un lenguaje en construcción: el diagnóstico de la violencia*, Flacso-Municipio Metropolitano de Quito, Quito.
- Colomer Viadel, Antonio (2015). *Comunidad y ciudades, constituciones y solidaridades*, Ciudad Nueva-Inauco, Buenos Aires.
- Colomer Viadel, Antonio. *Contra la conspiración universal de la infamia, el desafío de la alianza de los justos*. *Revista Iberoamericana de Autogestión y Acción Comunal*, Universidad Politécnica de Valencia, No. 61-63, Valencia, España, pp. 11-20.
- Costa, Gino (2012). *La situación de la seguridad ciudadana en América Latina*, Interamerican Dialogue, Lima.
- Chueca, Fernando (2013). *Breve historia del urbanismo*, Alianza Editorial, Madrid.
- Davis, Mike (2007). *Planeta de ciudades miserias*, FOCA, Madrid.

- Esquivel Hernández, Gerardo (2015). *Desigualdad extrema en México. Concentración del Poder Económico y Político*, OXFAM México, México.
- Harvey, David (1985). *Urbanismo y desigualdad social*. Siglo XXI Editores, Madrid.
- Harvey, David (2013). *Ciudades rebeldes. Del derecho a la ciudad a la revolución urbana*, Akal, Madrid.
- Jacobs, Jane (1975). *La economía de las ciudades*, Península, Barcelona.
- Jacobs, Jane (2011). *Muerte y vida de las grandes ciudades*, Capitán Swing Libros, Salamanca.
- Lozano, Wilfredo (1997). *La urbanización de la pobreza. Urbanización, trabajo y desigualdad social en Santo Domingo*, Flacso, Santo Domingo.
- Oviedo, Enrique (1999). Santiago, una ciudad con temor. *Revista Temas Sociales*, Núm. 26, julio-agosto, Santiago, Chile.
- Pires do Rio Caldeira, Teresa (2007). *Ciudad de muros*, Gedisa, Barcelona.
- Roiz, Javier (2013). *El mundo interno y la política*, Plaza y Valdez, México.
- Sassen, Saskia (2013). *Inmigrantes y ciudadanos. De las migraciones masivas a la Europa fortaleza*, Siglo XXI España, Madrid.
- Silva, Armando (2013). *Atmósferas ciudadanas. Grafiti, arte público, nichos estéticos*, Universidad Externado de Colombia, Bogotá.
- Silva, Armando (2013). *Imaginario, el asombro de lo social*, Universidad Externado de Colombia, Bogotá.
- Silva, Armando (2007). *Imaginario urbano en América Latina: urbanismos ciudadanos*, Fundació Antoni Tapies, Barcelona.
- Silva, Armando (2006). *Imaginario urbano*, Arango Editores, Bogotá.
- Silva, Armando (2005). *Polvos de ciudad*, Editorial Labalsa, Bogotá.
- Ziccardi, Alicia (compiladora) (2008). *Procesos de urbanización de la pobreza y nuevas formas de exclusión social*, Clacso-Siglo del Hombre Editores, Bogotá.

OTRAS FUENTES

- Atlas de la globalización 2008, Universidad de Valencia. Valencia, España.
- Atlas Geopolítico 2010, de *Le Monde Diplomatique* en español, Madrid, España.
- Guía para la prevención con jóvenes. Hacia políticas de cohesión social y seguridad ciudadana. ONU-Habitat-Universidad Alberto Hurtado, 2011, Santiago, Chile.
- Informe de la UNFPA 2007, Estado de la población mundial 2007. Liberar el potencial del crecimiento urbano.
- Informe: Estado de las ciudades de América Latina y el Caribe 2012. Rumbo a una transición urbana, ONU-Habitat. www.onuhabitat.org
- Informe: Panorama Temático Laboral. Transición a la formalidad en América Latina y el Caribe, Oficina Regional para América Latina y el Caribe, OIT, 2014.